

## **Nivel de seguridad de ficheros con datos de localización. Informe 160/2004.**

### **Ficheros de datos de localización. Medidas de seguridad**

La consulta plantea el nivel de seguridad que habrá de implantarse sobre un fichero del que es responsable la entidad consultante en que se harán constar datos referidos a la localización de terminales móviles de telefonía.

Los términos de la consulta no permiten determinar con claridad el contenido del tratamiento al que la misma se refiere, dado que no puede de los mismos deducirse si la entidad consultante viene a prestar un servicio a otras terceras entidades en relación con los terminales telefónicos de los que la misma sea abonada o si el tratamiento lo realiza de forma directa. Del mismo modo, se ignora si la entidad consultante va a tratar los datos identificativos de los usuarios de las mencionadas terminales o si el tratamiento aparece referenciado exclusivamente al número de abonado correspondiente a las mismas.

En todo caso, y aunque no haya sido planteado en la consulta, debe recordarse que el artículo 38.3 d) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, establece de modo terminante el derecho de los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas, extendido también a los usuarios, tal y como dispone el artículo 38.4 de la Ley, “a que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento informado y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado”.

Dicho precepto transpone al derecho español lo establecido en el artículo 9 de la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), según el cual:

“1. En caso de que puedan tratarse datos de localización, distintos de los datos de tráfico, relativos a los usuarios o abonados de redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, sólo podrán tratarse estos datos si se hacen anónimos, o previo consentimiento de los usuarios o abonados, en la medida y por el tiempo

necesarios para la prestación de un servicio con valor añadido. El proveedor del servicio deberá informar a los usuarios o abonados, antes de obtener su consentimiento, del tipo de datos de localización distintos de los datos de tráfico que serán tratados, de la finalidad y duración del tratamiento y de si los datos se transmitirán a un tercero a efectos de la prestación del servicio con valor añadido. Se deberá ofrecer a los usuarios y abonados la posibilidad de retirar en todo momento su consentimiento para el tratamiento de los datos de localización distintos de los datos de tráfico.

2. Cuando se haya obtenido el consentimiento de un usuario o abonado para el tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico, el usuario o abonado deberá seguir contando con la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de rechazar temporalmente el tratamiento de tales datos para cada conexión a la red o para cada transmisión de una comunicación.

3. Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico de conformidad con los apartados 1 y 2 personas que actúen bajo la autoridad del proveedor de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o del tercero que preste el servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario a efectos de la prestación del servicio con valor añadido.”

En consecuencia, el tratamiento al que se refiere la consulta sólo podría reputarse lícito en caso de respetar lo establecido en los preceptos citados, siendo en caso contrario constitutivo de infracción grave o muy grave de la mencionada Ley 32/2003, correspondiendo a esta Agencia Española de Protección de Datos la competencia sancionadora en esta materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 b) de la Ley 32/2003.

En lo referente a las medidas de seguridad, la previsión contenida en el artículo 4.4 del Real Decreto 994/1999 tiene por objeto el exigir medidas especiales de seguridad a aquellos tratamientos que sin incorporar los datos respecto de los que resulta exigible la implantación del nivel de medidas de seguridad de nivel medio o alto, vengán a acumular un número suficiente de datos que permitan obtener un perfil del comportamiento o preferencias del afectado.

En este supuesto, suponiendo que el tratamiento de los datos cumpla con los requisitos que se han señalado anteriormente, dicho tratamiento permitiría conocer la localización del afectado en cada momento concreto o en los supuestos en que dicha localización fuera sometida a tratamiento, lo que supondrá un conocimiento suficiente del comportamiento del usuario de la

terminal sometida a localización, en caso de que dicho usuario fuera suficientemente identificable.

Todo ello implicará que el supuesto deberá considerarse subsumido en el artículo 4.4 del Reglamento de Medidas de Seguridad, debiendo implantarse las medidas a las que el mismo se refiere, si bien, debe ser reiterado, todo ello en el supuesto de que el tratamiento efectuado respete los derechos reconocidos por la Ley 32/2003, cuestión ésta a la que no puede darse adecuada respuesta al carecerse de los antecedentes necesarios para ello.